

México neoliberal. ¿Globalización autoritaria con tránsito a la democracia?

Zermeño, Sergio

Sergio Zermeño: Cientista social mexicano. Miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México.

Trataremos de dar respuesta aquí a lo que aparece como la paradoja más evidente de la sociedad mexicana y en cierta forma también de América Latina, en este fin de milenio: por un lado, una tendencia al fortalecimiento de ciertos rasgos propios de los regímenes democráticos: renacimiento del juego partidista, elección de gobernantes por voto universal, legalidad jurídica e institucional, cierto equilibrio entre los poderes, etc., lo que ha permitido hablar de un "tránsito hacia la democracia" y hasta de una "consolidación de la democracia"; y, por otro lado, una creciente desigualdad social, la precarización de cada vez más amplios sectores poblacionales una desorganización acelerada y, en el extremo, una tendencia a la anomia social; pero en tercer lugar, y al mismo tiempo, un afianzamiento del liderazgo personalizado.

En otros términos: junto con un vigoroso renacimiento de los ideales liberales coexiste un olvido generalizado de las raíces igualitarias de la democracia que se hace sentir cada vez más en la falta de oportunidades laborales, culturales, educativas, etc., para una creciente mayoría de los habitantes de estos países y, en medio de ese escenario, descubrimos azorados el fortalecimiento de la relación vertical líder-masa: «el regreso del líder».

La duda no se hace esperar: ¿cómo es posible que en casi todos los países de América Latina, incluido naturalmente México, estas tendencias se estén afianzando a tal extremo, cada una por su lado, si la tensión entre ellas se ha demostrado históricamente insostenible? La respuesta a esta paradoja hay que buscarla en por lo menos tres fenómenos de carácter general: 1) una tendencia hacia el desordenamiento social producto del cambio acelerado, con la destrucción de las identidades colectivas y la apatía de enormes agregados sociales especialmente del medio popular; 2) una segmentación concomitante de los «mercados políticos» entre excluidos e integrados con la reclusión de estos últimos en el particularismo, en lo privado; 3) un intervencionismo constante desde el Estado neoliberal orientado al vaciamiento de

lo público, al dismantelamiento de los espacios intermedios de participación, facilitado por el manejo de la técnica, de los medios electrónicos de comunicación (destacadamente la TV), y de las instituciones de la alta cultura y sus cofradías intelectuales. A estas tres tendencias generales viene a unirse una característica propia de la matriz sociopolítica mexicana que puede resumirse como la tendencia secular de todas nuestras organizaciones, liderazgos, representaciones, vanguardias intelectuales, etc., a intercambiar organización e identidad de sus bases sociales por influencia del líder y del pequeño grupo en espacios cada vez más elevados de la pirámide estatal: nuestra propensión cultural a la buro-política como la hemos llamado en otra parte.

Estas cuatro tendencias, adelantemos la hipótesis, redundan en el vaciamiento de los espacios de participación social y política y en la erosión de las identidades intermedias entre lo social disperso y el Estado. Se debilita en consecuencia un rasgo fundamental de la democracia que son las identidades colectivas o asociativas ciudadanas con continuidad en el tiempo, haciéndose posible la separación entre integrados y excluidos. Nos encontramos, en resumen, ante un debilitamiento selectivo pero importante de lo público: de los espacios públicos de interacción comunicativa y de construcción y reproducción de identidades. Sólo así se entiende la coexistencia de regímenes democráticos en sociedades crecientemente desiguales, y sólo analizando estas tendencias podremos responder a la pregunta de si los sobresaltos de Haití, Venezuela y Perú son recaídas normales de la convaleciente transición hacia la democracia o constituyen rajaduras en una carcasa incapaz de contener la tensión antes descrita. Ahora detengámonos en cada una de las tendencias enunciadas, comenzando por aquélla del desordenamiento acelerado.

Impacto desarticulado

En la última década parece haberse impuesto una visión del futuro dominada, sin contrapesos, por la inminencia de las economías abiertas a la competencia internacional, por el fin de la actividad estatal en la producción material, los servicios y los gastos de beneficio social, y por la renovada esperanza en la capacidad emprendedora de la iniciativa privada, incluidos en esta denominación aquellos individuos inmersos en la informalidad del taller clandestino y del comercio ambulante.

Las políticas públicas en nuestros países han adoptado estos postulados y, en el caso mexicano, se busca activamente engancharnos en tal globalización a través de la firma inminente de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con Canadá. Los administradores y organismos gubernamentales responsables de este

proceso no ocultan la magnitud enorme de las transformaciones en puerta y de sus severos efectos sobre la mayoría de los mexicanos, desde los industriales y comerciantes hasta los obreros, los campesinos y los marginados, pero respaldan sus acciones con la firme convicción de que, si bien durante una etapa transitoria la globalización exigirá enormes sacrificios por parte de amplios sectores afectados, a la larga significará un precio soportable en la marcha de México hacia la modernización. Lo anterior, a no dudarlo, ha constituido un impacto desordenador (aunque el término oficial para describirlo sea el de «reordenamiento»), que se refleja en un panorama de pobreza, segmentación y, en el extremo, anomia social. Pero sería inexacto afirmar que los efectos negativos que derivan de cambios acelerados como estos dependen solamente de las políticas de la llamada globalización. Veámoslo de esta manera: los latinoamericanos hemos vivido un gran desorden:

1. En primer lugar, como resultado de la salida del orden tradicional y del crecimiento económico acelerado a partir de la posguerra (más acelerado, según Víctor Tokman, que el de los Estados Unidos durante su «despegue»: 4,8% entre 1870 y 1906 contra 5,5 de América Latina entre 1950 y 1980). Se trató de un impacto modernizador, de una aceleración sobre una matriz social y cultural en ocasiones completamente ajena al medio europeo que sirvió de cuna al industrialismo y al espíritu de empresa. Resultado de este primer desorden fueron la explosión demográfica, la urbanización salvaje y la degradación ecológica.

2. Pero más brutal aún resultó la segunda fuente de desorden: el total estancamiento económico en que América Latina se vio inmersa justo cuando ya se había adaptado a esa lógica de alto dinamismo. Sin embargo, estos países aceleran y frenan con distintos ritmos: Argentina, por ejemplo, se industrializa desde muy temprano, con una población de inmigrantes europeos (ya modernos en ese sentido), y su estancamiento se va acentuando desde los años 60. Pero en el otro extremo encontramos a un México arropado en la tradición y en la herencia hasta bien entrado el siglo y que en tres décadas prácticamente se muda a vivir en las ciudades. Es más, en este ejemplo las tasas de crecimiento económico no sólo no decayeron durante los años 70, como fue el caso en el resto de la región, sino que encontraron en los dólares del boom petrolero y en los «préstamos dulces», el combustible para la aceleración y para los proyectos «faraónicos» necesariamente desarticuladores. El severo estancamiento de los 80 desordenó aún más a esta sociedad altamente dinámica y aún no logramos hacer el recuento de la «pedacería social» producto de semejante desastre. Según el informe de la CEPAL, a lo largo de los años 80 el 5% de la población más rica mantuvo o aumentó sus ingresos mientras que el 75% de la población vio reducirse los suyos, y la fuerza laboral estaba desempleada o subempleada en

un 40%. En nuestro país, a su vez, según el impresionante informe que Tello hizo en 1990 sobre «El combate a la pobreza...», alrededor de la mitad de la población nacional (41 millones), no satisface sus necesidades esenciales y cerca de 17 millones vive en condiciones de extrema pobreza¹.

3. Ahora bien, de entre los fenómenos descritos tenemos que separar aquellos que derivan de la crisis del estancamiento y aquellos otros que son producto de las políticas de la globalización y de la apertura económica. Estos últimos aparecen desde el inicio de los años 80, se acentúan con nuestra entrada al GATT en 1985 y amenazan con magnificarse al ponerse en marcha el Tratado de Libre Comercio: a esto podríamos llamarlo un tercer efecto desordenador. Como lo han mostrado la sociología clásica y la contemporánea: la aceleración, los cambios de ritmo, las perturbaciones severas del orden colectivo, las modificaciones violentas del entorno social debido a las migraciones, las catástrofes, etc., llevan al individuo a perder control sobre su entorno, a perder los límites morales compartidos socialmente; a no nombrar y no verbalizar - a nomia - que son el origen de la desidentidad y el desorden.

La magnitud de este tercer impacto desarticulador queda de manifiesto si recordamos que entre 1980 y el año 2000 los hombres (y sobre todo las mujeres jóvenes), trabajando en las industrias maquiladoras de la franja fronteriza podrían pasar de cien mil a un millón (el 33% de la población manufacturera del país), lo que podría significar, tomando en cuenta las unidades familiares, una clara «norteñización» de la economía y de la población mexicanas; severos cambios podrían derivarse también de la llamada desindustrialización paralela a toda apertura comercial y que, sin tomar en cuenta la destrucción de la gran empresa de la etapa sustitutiva de importaciones, ha significado ya el cierre de setenta mil medianas y pequeñas empresas en menos de ocho años, el 50% del total (encontrándose amenazadas aún el 40% de las restantes). Recordemos en fin que entre tres y quince millones de campesinos podrían ser afectados, dependiendo de la severidad de la apertura comercial, la desaparición de los subsidios gubernamentales y la entrada a nuestro país de productos agrícolas básicos a precios muy reducidos (el precio del maíz mexicano duplica el estadounidense). Agroindustrialización y desaparición del ejido en el Norte y, en el Sur, emigración, autoconsumo defensivo y atraso en ejidos y comunidades sin ningún atractivo para el capital, podrían ser características de esta nueva etapa en el agro.

¹Significa que sus ingresos son apenas suficientes para adquirir, por grupo familiar, el 60% de los bienes y servicios indispensables; y en este marco la participación del gasto en desarrollo social con respecto al gasto total pasó de 14,8% en 1982 a 5,4% en 1987 (Manuel Canto: La Modernización de México, UAM, México, 1990).

Algo más, las condiciones de trabajo y de vida barrial de las (los) obreras de la maquila (70% mujeres y 7 de cada 10 menores de 24 años) y las de los jornaleros agrícolas ligados a las agroindustrias, ponen de manifiesto que pobreza y empleo ya no son atributos excluyentes sino que en el futuro, como lo ha mostrado Albaro Díaz para Chile², obtener un empleo ligado a la producción transnacionalizada no significará abandonar la situación de precariedad. Pero es más grave aún, ya que sólo una minoría de esa gran masa de migrantes jóvenes que se dirigirán a las regiones agroexportadoras del norte, a los Estados Unidos y a las grandes ciudades, encontrará un empleo regularmente remunerado debido a la modernización con exclusión que afectará al agro y a la debilidad de todo el modelo para absorber productivamente a los hijos del libre comercio y de la reconversión: entre 1982 y 1990 sólo se crearon 1,3 millones de empleos contra cerca de 10 millones de jóvenes que se integraron al mercado de trabajo estimándose que más de la mitad están en Estados Unidos en forma ilegal³.

Instrumento moral

Concomitantemente, un segundo fenómeno parece alarmante y nos coloca frente a la necesidad de repensar el tipo de democracia que creemos estar instaurando en nuestro país y en la región: estamos asistiendo a una fragmentación de los mercados políticos de manera que los sectores con mejores ingresos, mayor cultura, mejor educación y, en una palabra, los sectores mejor integrados a la modernización parecen aprovechar, de manera mucho más intensiva que en el pasado, los canales de la política y de la vida pública en general (partidos, parlamento, medios de difusión, universidades, espacios educativos y culturales, organismos gubernamentales, etc.), mientras que los sectores menos integrados se recluyen en el desorden, la atomización, la desidentidad, la anomia, la apatía y, como en un círculo vicioso, en la falta de participación en los espacios abiertos por la referida política liberal-democrática.

Esta segmentación de los espacios de lo público así como el desorden y la dispersión en que viven seis de cada diez mexicanos, ¿nos permite hablar, como ha interrogado el brasileño Alvaro Moises, del enraizamiento en lo social de una cultura democrática, de la generalización de una pauta de valores compartidos entre los diferentes segmentos en que se divide la población, consolidando un complejo de instituciones, procedimientos y orientaciones culturales con cierta estabilidad, capaz de alentar la participación del hombre común en los asuntos públicos?

²Albaro Díaz: «Nuevas tendencias en la estructura social chilena: asalarización informal y pobreza en los 80» en *Proposiciones*, N° 20, Santiago, 1991.

³José Luis Calva: *La Jornada*, 16/11/1991.

Aquí se ubica sin duda el punto neurálgico del actual modelo societal latinoamericano, pues el ascenso de regímenes políticos vía la democracia electoral no conduce a una mayor participación de la sociedad en los asuntos públicos sino que, más bien, dichos regímenes se apresuran a inhibirla como único camino para llevar adelante la reforma neoliberal de la economía. En efecto, desde el momento en que los regímenes de la llamada transición a la democracia aceptan abiertamente que la reconversión, la globalización y el libre comercio exigen políticas de ajuste que implican la exclusión y pauperización de enormes masas durante una etapa que puede ser larga, aceptan al mismo tiempo que atravesarán por períodos de inestabilidad sociopolítica que pueden ser muy peligrosos para el modelo en su conjunto (Venezuela y Perú comienzan a ser el paradigma negativo a este respecto), períodos de inestabilidad que tendrían su origen en ciertas constelaciones de los actores sociales más afectados por los cambios. En tales condiciones y con la certeza de que relanzar el crecimiento es el «fin» buscado a toda costa, algunos «medios» se justifican, y de manera inmediata se «legitima» el actuar preventivamente desalentando, o francamente desmantelando, la constitución de identidades sociopolíticas alternativas y de espacios públicos de interacción comunicativa que puedan volverse inmanejables o exigir del Estado compensaciones y subsidios que malogren la radicalidad y la agilidad que el reordenamiento requiere.

Pero hay algo más, junto al debilitamiento de lo público derivado del desorden anómico en el ancho mar de los excluidos y junto a las políticas neoliberales orientadas a la destrucción de los espacios intermedios identitarios, hay que reseñar un fenómeno adicional trabajando en el mismo sentido, pues sería un error nuestro transmitir una imagen según la cual ese 20% de sectores integrados a la modernización desempeña realmente una vida pública participativa en organizaciones sociales, partidos, parlamentos, medios de difusión, espacios de educación y de cultura, etc. En efecto, los sectores mejor integrados de las clases medias y altas se caracterizan, en estas sociedades como también en las más desarrolladas, por un individualismo posesivo centrado en el consumo personalizado. Para este medio social, el neoliberalismo ha venido a convertirse en una ideología que va mucho más allá de lo meramente económico, mucho más allá de una simple política para salir de la crisis, constituyéndose en el instrumento moral para justificar la desigualdad social creciente, para no confrontar más, en forma de culpa, la pobreza generalizada, el entorno deshumanizado, gracias a la aparición de un tercer actor a quien culpar: ese tercero entre los desheredados y yo es el Estado. En efecto, en la nueva visión moral de la historia existe un tercero: el Estado keynesiano, el Estado populista, el Estado socialista... que hegemonizó la etapa histórica anterior a la presente y a quien se puede acusar como el verdadero culpable de los vicios que hoy padece-

mos debido a sus errores y su corrupción. A partir de ahora, según esta visión, nos toca vivir una época de reconstrucción, de penitencia, que recaerá en las grandes masas por haber creído en la salida irresponsable del estatismo, del corporativismo, del anonimato comunitario. En tanto no podamos hacernos cargo del «orden nuevo» más vale refugiarnos en nuestros núcleos mínimos como la familia, el pequeño grupo profesional o político, la banda, la generación escolar, la cofradía tecnoburocrática, etc.

Estos sectores integrados de nuestras sociedades votan y se inconforman furiosos por los fraudes electorales de que requiere el neoliberalismo para cambiar las leyes mediante el mayoriteo parlamentario, pero reprueban el desbordamiento popular en tanto heraldo de nuevos liderazgos patrimoniales, motores de desestabilización de una sensible economía internacionalizada. Podrá ser exagerada la visión anterior pero tiene la cualidad de indicarnos otro importante factor de vaciamiento de lo público en nuestra época.

Debilidad por las alturas

A este vaciamiento coadyuva, en el caso de México, un rasgo muy propio de nuestra matriz de funcionamiento sociopolítico: esa propensión de las dirigencias, las élites, los representantes y la intelectualidad a ser atraídos mucho más por el vértice de la pirámide que por la base.

La cultura política de una sociedad se forma históricamente. Si por razones geográficas, étnicas, de guerras civiles o exteriores se logra perfilar en un lapso histórico secular un Estado poderoso junto con unos actores sociales endebles, constantemente barridos por la violencia plebeya y estatal, como en el caso de México, esa experiencia definirá una matriz de relación entre sociedad y Estado, una cultura política que «impregna» en su conjunto a la sociedad en cuestión, no sólo a los «poseedores» del Estado, sino también a quienes están afuera; todo el conjunto finca sus acciones en una misma axiología, establece objetivos de conquista y reproduce una retórica y unas formas organizativas similares, aunque se trate de bandos que se reconocen como antagónicos en la política y con ideologías particulares que se excluyen recíprocamente. En un país con un fuerte Estado ancestral, la acción política de las élites - ya sea en el gobierno o en la oposición - tiende a organizarse en torno al lugar desde donde todo parece posible (el vértice) y ese afán compartido reproduce y alimenta la matriz social, cultural y política históricamente formada en el autoritarismo (durante el propio movimiento del 68 los estudiantes se dedicaron

a construir una especie de Soviet Supremo que llevó por nombre Consejo Nacional de Huelga, tan piramidal como el adversario de quien exigían democracia).

Es quizás esta búsqueda del vértice, como única opción de identidad, y este vaciamiento crónico de los espacios de intermediación, lo que nos explica el funcionamiento cíclico de sociedades como la mexicana, en la que, a un larguísimo período de orden asegurado por el autoritarismo de un actor central, sucede un derrumbamiento casi total del Estado y del sistema político. Llegada esa ruptura, la acción directa, masiva, plebeya y en muchos casos descompuesta, no cesa hasta que, debido a la lógica de la guerra y a la sucesiva eliminación de las facciones, una fuerza hegemoniza la escena e instaura un nuevo orden necesariamente autoritario. Se instala un nuevo monopolio del poder y se aplasta, se desmantela o se integra a todos aquellos brotes de oposición, pero jamás se les acepta como un interlocutor (otro, exterior), con un espacio ganado y una continuidad asegurada.

No cabe duda entonces de que una invención genial de los años 70 y un hecho que reformó la dinámica sociopolítica del país fue la legitimación de los partidos y grupos de oposición y la apertura del sistema parlamentario: eso permitió que las vanguardias, en lugar de tender a la confrontación y para ello a la acumulación de fuerzas, tipo 1958 o 1968, o tantos otros sucesos de la historia mexicana, logaran con más facilidad una incrustación en las alturas y, de esa manera, se abriera con más prontitud una escisión con respecto a sus propias bases (la propensión burocrática de nosotros, los mexicanos). En la nueva modalidad las luchas sociales tendieron a desgarrarse, más dramáticamente que nunca, entre una acción social (resistencia a la exclusión, a la dominación, al despojo y a la explotación en una sociedad autoritaria), y una acción política (búsqueda por apropiarse del Estado y ejercer influencia en y desde los aparatos de poder preestablecidos), destruyéndose la integridad de la dirigencia, la relación entre partidos y movimientos, la continuidad de la acción y la consistencia de las identidades. Sólo que ahora todo esto se lograba por una vía no sangrienta. Pero aclaremos una cosa: una vía pacífica no quiere decir necesariamente, y menos en este ejemplo, una vía democrática puesto que aquí estamos hablando ni más ni menos que de la destrucción constante de las identidades sociales y de su continuidad. El parlamentarismo mexicano está pues más ligado a la producción de la paz que al fomento de bases democráticas sólidas, más ligado a la continuidad del autoritarismo que al robustecimiento de lo social, paradójicamente. Que haya diputados en la Cámara está muy bien para este esquema, porque sin eso no se cumple con el expediente «democrático» que demandan las inversiones y los acuerdos internacionales; que a su vez esos diputados no re-

presenten a ningún actor social o fuerza política real sino a la ciudadanía de manera abstracta, es también indispensable para el modelo.

¿Transición hacia dónde?

Pero sería un error restringir la destrucción de las intermediaciones a lo partidista-parlamentario. Entre lo social disperso y el Estado se encuentran muchas otras constelaciones que sufren este embate y que admiten un intento enumerativo: 1) en el plano más propiamente social hoy podemos constatar, en México y en América Latina, la crisis generalizada de los movimientos y las luchas sociales, la destrucción de la acción sindical y la prohibición de las huelgas y otras acciones directas que buscan una mínima continuidad o identidad; 2) en el plano organizativo social, con cierta institucionalidad sucede lo mismo: hay una crisis de las uniones, asambleas, coordinadoras, frentes, coaliciones, alianzas, órganos vecinales, comunidades eclesiales, federaciones obreras, agrarias, etc.; 3) en los espacios institucionalizados de lo público como el sistema escolar, universitario, de la cultura y en los medios de comunicación, también constatamos el mismo vaciamiento de la participación colectiva en aras del eficientismo científico-técnico y asistimos al desmantelamiento de lo que alguna vez fueron los aparatos asistenciales con fuerte participación social como los sistemas de salud, abasto, transporte y vivienda... 4) Ya hemos reseñado a las instituciones propiamente políticas de la sociedad: partidos y organizaciones políticas, parlamento, cúpulas sindicales, patronales... Creemos que la hipótesis sobre el debilitamiento de lo público puede ser sustentada en todos estos terrenos, aunque ahora no podamos extendernos más al respecto.

Lo que debemos recordar en fin, es que cuando las intermediaciones son pobres históricamente y lo son además por el cambio acelerado, el desorden anómico y el embate del Estado «modernizador» que las pulveriza, los miembros de una sociedad, sobre todo aquella gran mayoría que vive en la precariedad, se sienten aislados, solos, incapacitados para hacer frente a su situación por ellos mismos o por su grupo social en desintegración y apelan al líder como única esperanza para superar su situación desdichada. Ya sea Cuauhtémoc Cárdenas o Carlos Salinas, Alan García o Fujimori, Lula o Menem, Carlos Andrés Pérez o el que venga, el hecho es que vivimos un regreso del verticalismo en lugar de un reforzamiento de lo social, y de ello se aprovechan y lo alimentan programas del gasto público encaminados al culto de la personalidad como los programas de solidaridad tan recomendados por el Banco Mundial y el FMI para atacar los focos peligrosos de pobreza extrema. ¿Será correcto, entonces, hablar de una transición hacia la democracia para calificar lo que está sucediendo en nuestras sociedades?

La derrota de la sociedad ante el Estado

Si estuviéramos de acuerdo con lo anterior deberíamos preguntarnos si las ciencias sociales no le estarán haciendo el juego (en muchas ocasiones inconcientemente), a ciertas ideologías del poder cuando utilizan de manera excesiva los conceptos «tránsito a la democracia» o «consolidación de la democracia» para calificar la nueva etapa latinoamericana.

Veámoslo así: la nueva etapa de globalización de la economía plantea una nueva distribución de actores sociales en el pacto desarrollista y por ello se puede hablar de un modelo societal claramente distinto del populista sustitutivo que se aleja crecientemente de los principios de la democracia social: en nuestra época sucede que algunos de los actores mejor ligados al mundo moderno industrial no son necesariamente los actores incluidos en el pacto para el desarrollo globalizador: los sectores obreros ligados al núcleo privilegiado del nuevo modelo (a la industria de exportación: maquila, agroindustria, automotriz, petrolera, etc.), quedan completamente excluidos desde el momento en que cualquier elevación en sus condiciones salariales resulta como arena para el engranaje del modelo exportador cuyo éxito depende de la competitividad de los productos en el mercado mundial y ésta se encuentra en función directa de los bajos costos en materia salarial.

Lo paradójico también consiste en que si bien en el interior de la empresa o, digamos, en el interior del espacio productivo la clase trabajadora de la globalización deja de ser un miembro de la alianza estatal, no sucede así desde el punto de vista de su inserción en el espacio popular, en el barrio, en el poblado, etc., en donde el obrero (en tanto sujeto popular) es reconstituido como un sujeto integrante del pacto nacional. Cada vez el salario es más castigado aunque algunos subsidios a manera de «solidaridad» con la pobreza sean entregados por el Presidente en forma casi personal y sin mediaciones organizativas. En esta perspectiva se puede llegar a pensar que en casos extremos y bien localizados se haría factible otorgar un subsidio disfrazado al salario en el caso de aquellas empresas conectadas con el circuito internacionalizado: bajísimos salarios pagados en la empresa (para mantener la competitividad internacional), y dineros públicos, a manera de sobresueldo o subsidio a la clase obrera exportadora o, lo que es lo mismo, subsidio a las exportaciones, vía inversión directa en necesidades barriales, de abasto, transporte, etc. Pero claro, todo ello de manera muy circunscrita y localizado y entregado como dádiva por el patriarca, presidente otlatoni.

En esta medida el Estado, en el modelo neoliberal-dependiente, deja de ser en efecto un Estado populista, pues este último es impensable sin la clase obrera y sus corporaciones sindicales, pero ello no permite, tampoco, calificarlo como un Estado antipopular. Es cierto que en términos materiales, sociológicos y humanos todo el modelo tiende a excluir y a pauperizar a una masa cada vez más extensa de la población, absoluta y relativamente hablando (en donde la clase obrera ligada al aparato exportador es pequeña), pero en términos del tipo de Estado y de régimen tiene que ser tomado muy en cuenta el hecho de que la relación líder-masas recobra una importancia que parecía en retirada hacia el fin de la etapa sustitutiva, cuando sindicatos, empresarios y clases medias, debido al exceso de demandas, pusieron en jaque la alianza populista en toda América Latina hasta destruirla (con la subsecuente militarización).

En efecto, resulta que el actual panorama nos presenta: a) una relación renovada y hasta fortalecida entre el líder y las masas (lógica popular), b) una exclusión y una represión severa hacia la clase obrera y sus organizaciones, c) una amalgama entre el Estado y el gran capital internacionalizado, d) un desprecio total por todos los actores no reciclables de la etapa sustitutiva - no sólo obreros sino también los empresarios no reconvertibles competitivamente, grandes, medianos o pequeños -, e) una pauperización y una desorganización crecientes de las masas campesinas, obreras y populares y de los sectores medios, y f) un desmantelamiento acelerado de las organizaciones, instituciones o espacios de intermediación y formación de identidades colectivas entre lo social disperso y el Estado (sindicatos, coordinadoras, centrales, movimientos sociales, el sistema educativo y universitario, los medios de comunicación de masas, etc., adoptando, incluso los partidos y el parlamento, una nueva «distancia» con respecto a lo social).

En este panorama, las cúpulas corporativas de la etapa sustitutiva pueden seguir en el interior del reducido «núcleo duro» estatal pero sólo bajo la condición de renunciar, ahora más claramente que nunca, a cualquier tipo de defensa de sus agremiados y convirtiéndose en instrumentos de represión y aislamiento de liderazgos y acciones alternativas y en aparatos de destrucción de la identidad colectiva de sus bases.

Alguna vez se nos ocurrió calificar a este nuevo contexto como el de un «Estado de exclusión», lo que no deja de tener sentido porque denota bien la posición de exterioridad, pauperización y anomia de, sin duda, dos de cada tres mexicanos y latinoamericanos. Sin embargo, resulta una clasificación demasiado sociológica y económica, adecuada más bien para caracterizar a las dictaduras burocrático-autorita-

rias de los 70 y los 80 en el Cono Sur, pero limitada para dar cuenta del Estado neoliberal y su liderazgo en su articulación reciente con el pueblo. En esta tesitura, Guillermo O'Donnell ha propuesto la denominación «democracias delegadas», lo que es muy adecuado porque pone el énfasis en la referida destrucción de los espacios de intermediación tan propia del quehacer político neoliberal, pero que tiene el inconveniente de dar por sentado, desde el título mismo, aquello que justamente está siendo puesto en cuestión, es decir, la democracia, o la transición hacia la democracia o la consolidación democrática en México y en América Latina.

En estas condiciones para qué hablar de un tránsito a la democracia y por qué no hablar mejor de lo que es evidente: que la etapa neoliberal o de economía globalizada requiere en forma cada vez más clara de algún tipo de régimen autoritario, que todavía no sabemos cómo calificar, pero cuyo ejercicio autoritario (y no su empresa democratizadora), resulta plenamente funcional, sobre todo cuando tiene como receptáculo a un país esencialmente estatal como México.

Así, en el caso de América del Sur y particularmente del Cono Sur y Brasil, se podría decir que partiendo de una «situación oligárquica» se pasa a una «popular-nacional o populista» y luego a una que hoy conocemos como «burocrático-autoritaria» (O'Donnell, Garretón, Cavarozzi: que fue capaz de enfriar el exceso de demandas de todos los miembros de la alianza pluriclasista de la etapa anterior), para, a partir de ahí, confluir en un momento de «tránsito a la democracia» y de pretendida «consolidación» de ésta, hasta rematar en el momento actual, aún difícil de conceptualizar con precisión, pero que exhibe los rasgos combinados que enunciamos tres párrafos más arriba.

Digamos que México corresponde en el punto de partida y de llegada con esta clasificación aunque ha podido simplificar las etapas intermedias gracias a la función central del Estado: aquí se podría establecer que, desde un «Estado fuerte oligárquico» (porfiriano), pasamos a uno «popular-nacional» (con su clímax en el cardenismo), readecuándonos a continuación hacia un «Estado populista-desarrollista» (desde Alemán hasta Echeverría), para rematar en un «Estado globalizador autoritario» o, digamos, el que corresponde al momento de la globalización autoritaria y polarizante⁴, GAP, (que da inicio con López Portillo en su apertura al exterior, aunque sin expulsar a nadie de la alianza estatal gracias al petróleo y los préstamos dulces, y exhibe ya su forma más terminada con Salinas de Gortari a partir de 1989).

⁴Proponemos lo de polarizante mejor que lo de excluyente por las razones aludidas en torno a la apelación al pueblo y a la pobreza en el actual modelo.

Importa ahora subrayar una recurrencia a propósito del funcionamiento matricial del caso mexicano en tanto país estatal. En efecto, si algo llama la atención en el nuevo reparto de fuerzas sociales de la etapa globalizadora es el debilitamiento acelerado de todos los actores en el plano de la sociedad civil, organizados en el ámbito nacional, y más o menos embarneados a lo largo de la etapa sustitutiva de importaciones. Una vez más en la historia de México, debido ahora al libre comercio, a la competencia internacional y al enorme desorden desarticulador legado por la crisis y acentuado por la globalización acelerada, parecen verse barridas las fuerzas intermedias civiles de la etapa populista desarrollista. Del lado de las clases altas el empresariado medio sufre una merma considerable por su baja competitividad, a diferencia de lo sucedido en el neoliberalismo chileno y, junto a esto, son muy pocas las empresas más grandes de la etapa sustitutiva que resultan viables y pueden permanecer en manos de un empresariado sólido en la escena nacional; las más de las veces, junto a la cantidad enorme de quiebras, estos empresarios prefieren convertirse en comerciantes importadores de los artículos que antes producían, o volverse firmas subsidiarias, asociarse o vender sus empresas al capital extranjero, cuando no tomar el camino de la especulación bursátil. Del lado de la clase obrera el desmantelamiento es aún mayor: achicamiento cuantitativo de la masa de trabajadores ligada a la industria, atemorización y reclusión defensiva por la amenaza constante de recortes de personal, caída salarial, sustitución de viejas empresas por nuevas con mano de obra más joven, con menor escolaridad, mayor productividad y en regiones geográficas muy distintas (norteamericanización), decadencia marcada de sindicatos, organizaciones y legislaciones laborales, total desprestigio y ataque furioso desde el Estado y la sociedad hacia las formas asociativas-corporativas que se traducen en «bienestar inmerecido» y corrupción, etc., etc. Los llamados sectores medios asalariados también sufren los mismos embates enumerados anteriormente y en forma aguda en lo que se refiere a la amenaza de despidos ante el achicamiento severo de los empleos estatales y tienden a recluirse en lo privado, apartándose de las formas asociativas y de la participación política, convencidos de que los populismos, los socialismos centralizados, la política en las calles, las asambleas, los sindicatos y la plaza pública sólo redundan en liderazgos sin control y en inseguridad del empleo.

Por lo demás, los centros universitarios, los organismos de cultura, etc., cuando no son desmantelados deliberadamente por la vía presupuestal y elitizados en consecuencia, terminan, como en un círculo vicioso, apartados de sus referentes sociales y de sus identidades basistas debido a la apatía, la reclusión en lo privado y la crisis de participación ciudadana en general.

Barrido completamente el campo de las intermediaciones, y debilitados a tal grado los actores propiamente sociales legados por la etapa de industrialización nacional, nos encontramos ante un panorama abonado para el regreso del Estado fuerte, una vez más en la historia de este país estatal, que pone en evidencia que la transición a la democracia ha sido una mera cortina de humo y que lo que realmente se avizora es la transición a algún tipo de autoritarismo con actores sociales debilitados; de hecho la derrota de la sociedad ante el Estado, la técnica y los intereses económicos de un puñado de compañías aferradas a la mundialización económica.

En esta medida, en el núcleo del Estado sí existe una alianza con la clase capitalista transnacionalizada lo que podría conducir a calificarlo como un «Estado de clase», pero una clasificación de este tipo haría perder de vista que no son en lo fundamental los agentes económicos en tanto agentes clasistas (o compañías transnacionales), quienes aseguran el éxito del modelo globalizador (lo que implicaría un achicamiento y casi desaparición del aparato estatal según la receta del neoliberalismo), sino que es la capacidad de fortaleza y autoridad del Estado lo que está resultando fundamental para el éxito del modelo globalizador en las sociedades de América Latina, pero también en las sociedades exitosamente globalizadas de Asia. Claro está que esa fortaleza y autoridad se puede lograr por constelaciones histórico-sociales como en el caso mexicano o asiático, o por situaciones de extrema emergencia como son el desbordamiento social incontrolado o la amenaza de guerra civil o, en fin, todas aquellas situaciones capaces de colocar a un actor incontestado al frente del proyecto globalizador, siendo Chile el caso más obvio, pero quedando inscrito también Perú, con su golpe desmantelador de intermediaciones, como un intento de esto último.

Referencias

*Canto, Manuel, LA MODERNIZACION DE MEXICO. - México, UAM. 1990; Nuevas tendencias en la estructura social chilena: asalarización informal y pobreza en los 80.

*Díaz, Alvaro, PROPOSICIONES. 20 - Santiago, Chile. 1991;

*Calva, José Luis, LA JORNADA - PRENSA. 16/11 - 1991.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad N° 121 Septiembre- Octubre de 1992, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>.